

Presentación

Aunque la coincidencia no haya sido totalmente pretendida, varias de las cuestiones consideradas en este número de *Temas de Coyuntura* tienen que ver de hecho con algunos de los problemas más urgentes que debe enfrentar el actual gobierno.

Dentro de la política fiscal hay que encontrar formas de cerrar o aminorar el déficit presupuestario. Además de buscar nuevas fuentes de ingresos, es posible reducir también la brecha desde el lado del gasto. Una de las maneras de lograrlo es racionalizar y focalizar mejor los subsidios.

A este respecto, cada vez son más las voces que se suman a la idea de modificar la política de financiamiento de la educación pública, en donde la gratuidad total de las universidades actúa regresivamente sobre la distribución del ingreso, al subsidiar en mayor proporción a los niveles sociales que menos lo necesitan.

El artículo de **Gabriela Alcalá** analiza el grado de influencia que tienen ciertos factores socioeconómicos, demográficos y culturales en la decisión de las familias sobre si demandar o no educación para sus hijos. Para ello construye una función de demanda de educación que identifique los factores que la determinan. Desde los datos disponibles, la autora muestra las condiciones familiares (nacionalidad, sexo, ingreso del hogar, grado de educación de los padres) que restringen la probabilidad de asistencia de los niños en edad escolar a centros de enseñanza. Tales constataciones le permiten adelantar algunas recomendaciones generales orientadas a atenuar los factores que reducen esta demanda.

Los dos artículos siguientes insisten en la temática de las políticas de ingresos y redistribución.

Dalia Romero analiza el impacto de las variables económicas, sociales, culturales y políticas en la evolución de la tasa de mortalidad. Tras presentar una breve descripción de los cambios socio-económicos y de la transición de la mortalidad desde los años treinta, se hace referencia a las desigualdades internas en los indicadores de sobrevivencia entre los distintos grupos sociales. Más tarde se presenta un primer acercamiento a los indicadores de salud de los años ochenta, que en términos de calidad de vida y desarrollo

ha sido identificada como la década perdida. Por fin se examina por qué otros países con igual o mayor deterioro que Venezuela en los indicadores económicos no han padecido un detrimento tan intenso en sus indicadores de salud, presentando para ello algunas características de la política de salud en Venezuela así como la distribución del presupuesto en el sector.

En el siguiente artículo **Eduardo J. Ortiz** examina en un contexto más amplio el impacto que sobre la distribución del ingreso ejerce la política fiscal. En un primer momento se consideran los efectos redistributivos del gasto público, prestando atención especial a las áreas de educación y salud, y al problema de la focalización, así como a las consecuencias que sobre la distribución del ingreso tiene la política tributaria, y los diferentes tipos de impuestos directos, indirectos o inflacionarios que se pretenda implantar. Posteriormente el análisis se concentra en la actuación de los agentes económicos frente a las políticas fiscales. En este contexto se trata de encontrar tipos de impuestos cuya implantación mejore a juicio de todos el bienestar social, y se presta especial atención a las presiones políticas que los diversos agentes pueden ejercer sobre los encargados de la toma de decisiones, o sobre los potenciales receptores de los subsidios. Por fin se mencionan diversos instrumentos que ayuden a medir los efectos redistributivos de diversos tipos de transferencias.

El déficit fiscal está de hecho estrechamente relacionado con otros tipos de políticas públicas como la monetaria y la cambiaria.

En este contexto es frecuente afirmar que todo déficit público tiende a crear o reforzar los procesos inflacionarios, y que puede incidir negativamente sobre la tasa de depreciación de la moneda.

A este respecto **Adriana Arreaza** aborda el estudio de la situación fiscal venezolana para 1991 y su relación con los objetivos del Cordiplan en materia de inflación, crecimiento y cambio real. Para ello, siguiendo un modelo diseñado por Anand y Van Wijnbergen, supone que el incremento en el nivel de precios está fuertemente determinado por la necesidad que tiene el Gobierno de financiar sus déficit mediante el impuesto inflacionario. Tras estimar una función de demanda de saldos reales, inelástica con respecto a la inflación y de elasticidad unitaria con respecto al ingreso, concluye que el ajuste fiscal requerido para mantener coherencia con los objetivos básicos de política macroeconómica será menor cuanto mayores sean las tasas de inflación y de crecimiento del ingreso, y cuanto menor sea la depreciación real del tipo de cambio.

Los estudios sobre la tasa de cambio, como lo acabamos de ver, suelen ser planteados en un contexto que toma en cuenta predominantemente sus efectos sobre la inflación y sobre la balanza comercial de exportaciones e importaciones. Sin dejar de lado estos aspectos, el artículo de **Régulo Sardi** y **Harold Zavarce** toma también en cuenta las relaciones entre política cambiaria y tasa de interés.

Presenta un modelo aplicable a una pequeña economía abierta con perfecta movilidad de capitales, donde existe un rubro de exportación que es propiedad del Estado, financia la mayor parte del gasto público y es la principal fuente de divisas. En ese

contexto se estudia el equilibrio en un mercado cambiario manejado por la autoridad monetaria y con una tasa de cambio flotante; el equilibrio en un mercado monetario con alta sustituibilidad entre activos y externos y perfecta flexibilidad en la tasa de interés; y las condiciones que ha de seguir una dinámica de ajuste para lograr el equilibrio general. En la segunda parte del trabajo se presenta un análisis estático comparativo del impacto de un aumento en el valor de las exportaciones o en las entradas netas autónomas de capital, y se examinan las medidas de política monetaria y cambiaria que es necesario tomar para mantener el equilibrio una vez logrado. Como se puede apreciar, el modelo trata de representar muy de cerca las características de una economía semejante a la venezolana.

Por fin **Gianfranco Tesone A.** cierra el número analizando un tema que en el presente ha cobrado mucha más actualidad aún que en el momento en el que se escribió el artículo. El de la concentración del mercado financiero venezolano tanto a nivel de banca comercial como de banca hipotecaria, sociedades financieras, entidades de ahorro y préstamo y empresas de seguros. Quiénes tienen la mayor parte de las acciones detrás de esa multiplicidad de nombres y registros, y cuáles son los grupos que mueven la mayor parte del dinero venezolano.

Naturalmente, el cuadro ha cambiado sensiblemente después de la intervención abierta del Banco Latino, y de la estatización medio encubierta de otras entidades financieras de menor presencia en el mercado. Pero en lo fundamental el panorama aquí representado sigue vigente.

Y así tendríamos que volver a comenzar la rueda, porque la crisis del sistema financiero afecta al déficit fiscal, la inflación, la tasa de cambio y la distribución del ingreso.

Ojalá estos aportes que aquí presentamos contribuyan a avanzar un poco más lejos en el encuentro de soluciones a largo plazo para tantas dificultades que a todos nos apremian.

Eduardo J. Ortiz F.
Director del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales